

TENANT TALK

INVIERNO 2021 | VOLUMEN 12, NÚMERO 1

La eterna crisis La lucha por la justicia racial y de vivienda

UNA PUBLICACIÓN DE LA COALICIÓN NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE
PERSONAS DE BAJOS INGRESOS (NATIONAL LOW INCOME HOUSING COALITION)

Editores

Kyle Arbuckle,
karbuckle@nlihc.org
202-507-7446

Paul Kealey
pkealey@nlihc.org
202-507-7451

PERSONAL DE NLIHC

Kyle Arbuckle	Organizador de Defensa de la Vivienda
Olivia Arena	Organizadora de Defensa de la Vivienda
Xavier Arriaga	Analista de Políticas
Andrew Aurand	Vicepresidente de Investigación
Victoria Bourret	Organizadora Sénior de Defensa de la Vivienda
Jen Butler	Directora de Relaciones y Comunicaciones con los Medios
Alayna Calabro	Analista de Políticas - Respuesta ante el COVID-19
Josephine Clarke	Asistente Ejecutiva Sénior
Bairy Diakite	Gerente de Operaciones
Emma Foley	Pasante de Investigación
Dan Emmanuel	Analista de Investigación Sénior
Ed Gramlich	Asesor Sénior
Kim Johnson	Analista de Políticas de Vivienda
Jameil Johnson	Pasante de Diseño Gráfico y Comunicaciones
Paul Kealey	Director de Operaciones
Mike Koprowski	Director de la Campaña Multisectorial de la Vivienda
Joseph Lindstrom	Director de Organización de Campo
Mayerline Louis-Juste	Especialista en Comunicaciones
Neetu Nair	Analista de Investigación
Khara Norris	Directora Sénior de Administración
Noah Patton	Analista de Políticas de Vivienda
Ikra Rafi	Coordinadora de Servicios Creativos
Catherine Reeves	Coordinadora de Desarrollo
Sarah Saadian	Vicepresidenta de Políticas Públicas
Brooke Schipporeit	Organizadora de Defensa de la Vivienda
Kevin Tan	Pasante de Diseño Gráfico y Comunicaciones
Sophie Siebach-Glover	Pasante de Campo
Dan Threet	Analista de Investigación
Chantelle Wilkinson	Directora de Campañas de Vivienda
Renee Willis	Vicepresidenta de Campo y Comunicaciones
Rebecca Yae	Analista Sénior de Investigación
Diane Yentel	Presidenta y Directora Ejecutiva

JUNTA DIRECTIVA DE NLIHC

Marla Newman, Presidenta | Winston-Salem, NC
Dora Gallo, Primera Vicepresidenta | Los Ángeles, CA
Bob Palmer, Segundo Vicepresidente | Chicago, IL
Ann O'Hara, Miembro General del Comité Ejecutivo | Boston, MA
Nan Roman, Miembro General del Comité Ejecutivo | Washington, DC
Moises Loza, Tesorero | Alexandria, VA
Emma "Pinky" Clifford, Secretaria | Pine Ridge, SD
Cathy Alderman | Denver, CO
Dara Baldwin | Washington, DC
Russell "Rusty" Bennett | Birmingham, AL
Loraine Brown | Nueva York, NY
Yanira Cortes | Toms River, NJ
Deidre "DeeDee" Gilmore | Charlottesville, VA
Aaron Gornstein | Boston, MA
Bambie Hayes-Brown | Atlanta, GA
Rachael Myers | Seattle, WA
Karlo Ng | San Francisco, CA
Chrishelle Palay | Houston, TX
Eric Price | Washington, DC
Shalonda Rivers | Opa-Locka, FL
Megan Sandel | Boston, MA
Michael Steele | Nueva York, NY
Mindy Woods | Seattle, WA

CONTENIDO

ii MENSAJE DEL CONSEJO EDITORIAL

1 ACTUALIZACIONES SOBRE LAS ELECCIONES

Las elecciones ofrecen un nuevo camino a seguir
La congresista Marcia Fudge nominada para ser secretaria del HUD
Un nuevo Congreso
Los nuevos congresistas aportan diversidad
Nota de la NLIHC al equipo de transición de Biden

5 JUSTICIA RACIAL Y DE VIVIENDA

Equidad racial y justicia en materia de vivienda:
Resumen del año, el camino a seguir
El mito del suburbio blanco y la "invasión suburbana"
Vivienda, cambio de vecindario y exceso de policía
Los votantes de Los Ángeles eligen la inversión en la comunidad en lugar de las fuerzas del orden y el encarcelamiento
Actualización de la norma antitransgénero del HUD
Actualización de la norma de estatus mixto del HUD
Serie de seminarios web de la NLIHC: Equidad racial y justicia en materia de vivienda durante y después de la pandemia de COVID-19
Marco para una respuesta equitativa a la falta de vivienda ante el COVID-19

13 PERSPECTIVAS DE LOS RESIDENTES

Utilizar las experiencias vividas para impulsar el cambio Por Andrew Anderson
Que se haga justicia en materia de vivienda en Los Ángeles Por Zella Knight

15 PUNTOS DESTACADOS ESTATALES Y LOCALES

California Coalition for Rural Housing (Coalición para la Vivienda Rural de California)
Baltimore Renters United
Minnesota Housing Partnership y Oregon Housing Alliance

17 RESUMEN DE LA POLÍTICA

Actualización de la ayuda ante el COVID/del gasto federal
Repaso de los programas estatales y locales de ayuda de emergencia para el alquiler en 2020
Resumen de las protecciones contra el desalojo durante la pandemia de COVID-19
El costo de los desalojos
Avanzan en el Congreso varios proyectos de reforma para la recuperación de desastres

TENANT TALK

Tenant Talk es publicada por la Coalición Nacional para la Vivienda de Personas de Bajos Ingresos (National Low Income Housing Coalition). Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin el permiso de la NLIHC, excepto cuando se indique lo contrario.

ACERCA DE NLIHC

La Coalición Nacional para la Vivienda de Personas de Bajos Ingresos (National Low Income Housing Coalition, NLIHC) está dedicada exclusivamente a lograr una política pública justa en términos sociales que garantice que las personas con los ingresos más bajos en Estados Unidos tengan hogares dignos y asequibles.

Una parte clave de nuestro trabajo se lleva a cabo a través de la educación y participación públicas. La NLIHC tiene el firme compromiso de compartir recursos y herramientas que ayuden a las personas a convertirse en defensores informados. Tenant Talk es uno de los muchos recursos que proporcionamos al público.

HÁGASE MIEMBRO

La NLIHC depende en gran medida del apoyo de nuestros miembros para financiar nuestro trabajo y orientar nuestras decisiones sobre políticas. ¡Los miembros son nuestra fortaleza! Cientos de residentes de bajos ingresos y organizaciones de residentes se han unido a la comunidad de la NLIHC convirtiéndose en miembros.

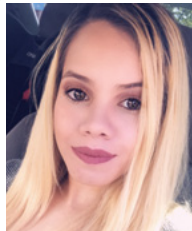
Sugerimos una cuota de membresía anual de solo \$5 para una membresía individual de persona de bajos ingresos y de \$15 para una organización de residentes de bajos ingresos. Le agradeceremos que considere convertirse en miembro de la NLIHC hoy mismo en nlihc.org/membership.

Diseño de la cubierta: Shuting Zhou, Pasante de Comunicaciones y Diseño Gráfico.
Diseño de la puesta en papel: Ikra Rafi, Coordinadora de Servicios Creativos.

Mensaje del Consejo Editorial



Loraine Brown



Yanira Cortés



Deidre Gilmore



Shalonda Rivers



Michael Steele



Mindy Woods



Estimados lectores:

El 2020 fue, sin lugar a dudas, un año difícil. En marzo, la mayor parte del mundo entró en confinamiento debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, debido a que no se aplicaron los protocolos, a la falta de una red de seguridad social y a la incompetencia del gobierno, casi 500,000 personas han muerto en Estados Unidos a causa del virus. A principios del verano, George Floyd, de Minneapolis, MN, y Breonna Taylor, de Louisville, KY, fueron asesinados por la policía. Sus trágicas muertes desencadenaron protestas masivas contra la brutalidad policial en todo el mundo y nos hicieron reflexionar nuevamente sobre la raza y el racismo. Por último, pero no menos importante para nuestros lectores, tenemos una crisis de estabilidad de la vivienda agravada por las consecuencias económicas de la pandemia.

Un denominador común de todos estos problemas es la raza. Un estudio de la Universidad de Minnesota determinó que la esperanza de vida de las personas negras y latinas se acortaría varios años debido a todos los aspectos de la pandemia, mientras que la de las personas blancas se acortaría menos de un año. La brutalidad policial es un problema que afecta a todos los estadounidenses, pero de forma desproporcionada a las comunidades de nativos americanos, negros y latinos. Y los desalojos han afectado más a las mujeres negras, ya que miles de ellas han sido desplazadas de sus hogares.

No debemos dejar que estas duras verdades nos desesperen. Por el contrario, estas deben motivarnos a la acción. Aunque a veces parece que estamos siendo testigos de una muerte lenta e implacable y de un abuso de las personas negras y morenas en este país, hay algunos motivos para tener esperanza. Aunque el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris tienen historias complicadas con las comunidades negras y morenas, su administración ha prometido una acción audaz en materia de justicia racial e inversiones significativas en la equidad de la vivienda. Nuestro trabajo como defensores de la justicia de la vivienda es hacer que cumplan sus promesas, alzar la voz por los más necesitados y salir a la calle (con seguridad, manteniendo la distancia social, con mascarillas), acudir a los medios de comunicación y a nuestros representantes electos en nuestra lucha por la justicia racial y de la vivienda.

La supremacía blanca y el racismo sistémico están profundamente arraigados en Estados Unidos, pero la NLIHC se ha comprometido a erradicarlos. Únase a nosotros.

En solidaridad,

*Consejo
editorial*

Las elecciones ofrecen un nuevo camino a seguir

Una cantidad récord de votantes de todo el país participó en las elecciones de noviembre de 2020. La alta participación de los votantes es notable si se tiene en cuenta que había muchas cuestiones de seguridad con el voto en persona debido a la pandemia de coronavirus. La mayoría de los estados ampliaron las opciones de voto anticipado y voto por correo, ¡y funcionaron! Los índices de participación aumentaron en los 50 estados; el número total de votos emitidos fue un récord histórico; y el porcentaje de votantes elegibles que votaron fue el más alto desde las elecciones presidenciales de 1980.

La NLIHC apoyó los esfuerzos de registro y participación de los votantes a través de nuestro proyecto no partidista *Our Homes, Our Votes: 2020* (Nuestras viviendas, nuestros votos: 2020). Ahora más que nunca, las organizaciones de vivienda reconocen que el movimiento por la justicia de la vivienda requiere una acción en torno a las elecciones. A pesar de los desafíos de la pandemia, en 2020 los consejos de inquilinos, los proveedores de vivienda, las campañas de iniciativas electorales, los grupos de defensa y las agencias de servicios se esforzaron por aumentar la participación electoral de los inquilinos con bajos ingresos. Más información en: www.ourhomes-ourvotes.org

Las elecciones tienen consecuencias, y hay nuevas oportunidades para avanzar en las soluciones de justicia en materia de vivienda. La NLIHC agradece a todos los que han participado en la votación.



FOTO: Por Tiffany Tertipes, sobre de correo electoral estadounidense con mascarilla

LA CONGRESISTA MARCIA FUDGE NOMINADA PARA SER SECRETARIA DEL HUD

La secretaria del HUD, Marcia Fudge



El presidente electo Joe Biden nombró a la representante Marcia Fudge (D-OH) para ser la 18ª secretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) el 8 de diciembre de 2020. De ser confirmada, la secretaria designada Fudge dirigirá el HUD en un momento enormemente difícil para los inquilinos con los ingresos más bajos y las personas sin hogar en Estados Unidos, pero también en un momento de oportunidad para avanzar en la justicia de la vivienda.

Millones de inquilinos que han perdido el trabajo o los ingresos debido a la pandemia de coronavirus están luchando para pagar el alquiler y se enfrentan al desalojo, y las personas que se encuentran sin hogar presentan un riesgo especialmente alto de contraer, propagar y enfermarse gravemente. La secretaria designada Fudge debe dar prioridad a la protección de la salud y los hogares de nuestros vecinos con los ingresos más bajos, así como a la reparación del daño causado a la justicia y la equidad en materia de vivienda por parte de la administración de Trump y al avance de soluciones a largo plazo.

La secretaria designada Fudge ha representado al 11º distrito electoral de Ohio, que incluye gran parte de Cleveland, desde 2009. Aunque llega al HUD con poca experiencia en política de vivienda, se ha centrado en áreas conectadas con la vivienda asequible, como la seguridad alimentaria y los derechos civiles. Recientemente ha presidido el Subcomité de Nutrición del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, así como el Subcomité de Derechos Civiles y Servicios Humanos del Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes. La secretaria designada Fudge también fue miembro y ex presidenta del Caucus de Congresistas Negros y miembro del Caucus Progresista, entre otros.

El HUD desempeñará un papel vital en la respuesta de la administración al coronavirus y en el avance de la visión del Presidente Biden sobre la justicia racial y de vivienda. El Presidente Biden ha propuesto un audaz paquete legislativo de ayuda ante el COVID-19 que incluye recursos y protecciones esenciales para la vivienda y las personas sin hogar (véase: <https://bit.ly/3aQivBD>). Una vez promulgado, el Congreso y la administración probablemente centrarán su atención en un paquete más amplio de estímulo e infraestructuras, que ofrecerá la oportunidad de abordar la estabilidad de la vivienda a más largo plazo mediante soluciones como los vales de vivienda, las inversiones en el Fondo Fiduciario de la Vivienda nacional y la vivienda pública, y la ampliación de las protecciones para los inquilinos.

La NLIHC espera trabajar estrechamente con la secretaria Fudge en su nueva función en el HUD para crear comunidades inclusivas y viviendas asequibles de calidad para todos.

CAPITOLIO DE LOS ESTADOS UNIDOS



UN NUEVO CONGRESO

El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris no fueron los únicos funcionarios federales electos en noviembre. Los votantes también tomaron decisiones importantes sobre la futura dirección del Congreso. Por primera vez desde 2010, el Partido Demócrata controla la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado.

El Senado de EE. UU. está actualmente dividido al 50 % entre demócratas y republicanos, después de que cinco escaños del Senado ocupados anteriormente por los republicanos fueran ganados por los demócratas. El más notable de estos cambios se produjo en Georgia, donde una singular segunda vuelta electoral celebrada en enero desbancó a dos titulares republicanos y llevó la cámara a un empate. La vicepresidenta Kamala Harris ejerce como presidenta del Senado, y será el voto de desempate en la cámara, lo que dará el control a los demócratas. Aunque los demócratas tienen ahora el control del Senado, los republicanos podrán seguir utilizando el obstruccionismo, que en efecto requiere que la legislación del Senado tenga 60 votos para ser aprobada, y no solo una mayoría simple. El senador Charles Schumer de Nueva York, será el líder de la mayoría del Senado durante los próximos dos años.

En la Cámara de Representantes, los demócratas mantuvieron el control durante las elecciones, pero su mayoría se redujo en 10 escaños. Los demócratas tienen ahora una escasa mayoría de 222 a 213. La representante Nancy Pelosi de California continuará su liderazgo como presidenta de la Cámara durante el 117º Congreso.

LOS NUEVOS CONGRESISTAS APORTAN DIVERSIDAD

Tras las recientes elecciones, hay un total de 60 nuevos representantes y siete nuevos senadores. De los nuevos congresistas, 18 son demócratas y 49 republicanos. Ahora hay 118 mujeres en la Cámara de Representantes, la mayor cantidad en la historia de Estados Unidos. La cantidad de representantes negros en el Congreso es la más alta de la historia, con 58 representantes en la Cámara y dos senadores. Además, los representantes Ritchie Torres y Mondaire Jones, ambos de Nueva York, son los primeros hombres negros del Congreso que se identifican como homosexuales. También hay un récord de miembros del Congreso (45) que son latinos; 39 en la Cámara y seis en el Senado. La recién elegida Madison Cawthorn, de Carolina del Norte, es la primera congresista nacida en los años 90. Con 25 años, el Rep. Cawthorn es el miembro más joven del Congreso.

MEMORÁNDUM DE LA NLIHC AL EQUIPO DE TRANSICIÓN DE BIDEN

El 10 de noviembre, la NLIHC envió un memorándum (véase: <https://bit.ly/3sZYL6F>) al equipo de transición del entonces Presidente electo Joe Biden, en el que se describen las formas en que la nueva administración puede abordar uno de los problemas más críticos a los que se enfrentan las familias con ingresos extremadamente bajos en la actualidad: la falta de viviendas seguras, accesibles y asequibles.

Durante su campaña, el Presidente Biden declaró que “la vivienda debe ser un derecho, no un privilegio” y se comprometió a “reconstruir mejor” mediante grandes inversiones en vivienda asequible, incluyendo la entrega de vales de vivienda para todos los que cumplan los requisitos, y abordando generaciones de políticas de vivienda discriminatorias. En la carta, la NLIHC identificó oportunidades clave que la administración de Biden debe perseguir no solo para ayudar a la gente a recuperarse de la pandemia de COVID-19, sino para abordar las causas estructurales subyacentes de la crisis de la vivienda asequible en la nación.

La NLIHC pidió al Presidente Biden que emita una acción ejecutiva en su primer día de mandato que amplíe, mejore y haga cumplir la moratoria de desalojo para garantizar que las familias puedan permanecer seguras en sus hogares mientras dure la pandemia. (Prolongó la moratoria al menos hasta el 31 de marzo, pero aún se necesitan mejoras y controles en su aplicación). La carta de la NLIHC también pide a la administración que trabaje con el Congreso para aprobar otro paquete de ayuda con los recursos y las protecciones necesarias para abordar las necesidades de salud y de vivienda de las personas sin hogar y de los inquilinos de más bajos ingresos de Estados Unidos. (El presidente emitió una propuesta con muchas de las principales recomendaciones de la NLIHC. Véase: <https://bit.ly/3aQivBD>)

Además, la NLIHC elaboró soluciones políticas a largo plazo para garantizar la asequibilidad de la vivienda, incluyendo la reducción de la brecha entre los ingresos y los alquileres; la ampliación y la preservación de la oferta de viviendas asequibles; la prevención de la inestabilidad de la vivienda con la prevención de los desalojos; el tratamiento del cambio climático y la garantía de una recuperación equitativa de viviendas en caso de desastre; y el tratamiento de la vivienda justa, y la equidad racial y de ingresos.

La carta insta a la nueva administración a deshacer las políticas discriminatorias destructivas aplicadas durante los últimos cuatro años por la administración anterior. La carta de la NLIHC pide a la administración de Biden que revierta los cambios perjudiciales realizados en la norma de Promoción Afirmativa de la Equidad de Vivienda (AFFH) de 2015, la norma de Impacto Desigual de 2013 y la norma de Igualdad de Acceso de 2016, y que revierta la propuesta antiinmigrante de la administración anterior de prohibir que las familias inmigrantes de “estatus mixto” vivan en viviendas públicas y otras subvencionadas por el HUD o el USDA. La administración de Biden ha dado pasos positivos en todos estos frentes.

La NLIHC se dedica a trabajar con la administración Biden-Harris y el Congreso para promulgar políticas e invertir en soluciones que garanticen que las personas con menos ingresos puedan vivir en casas seguras, accesibles y asequibles, y que promuevan la igualdad racial y de ingresos.

Lea el memorándum de la NLIHC al equipo de transición del Presidente electo Joe Biden: <https://bit.ly/3sZYL6F>

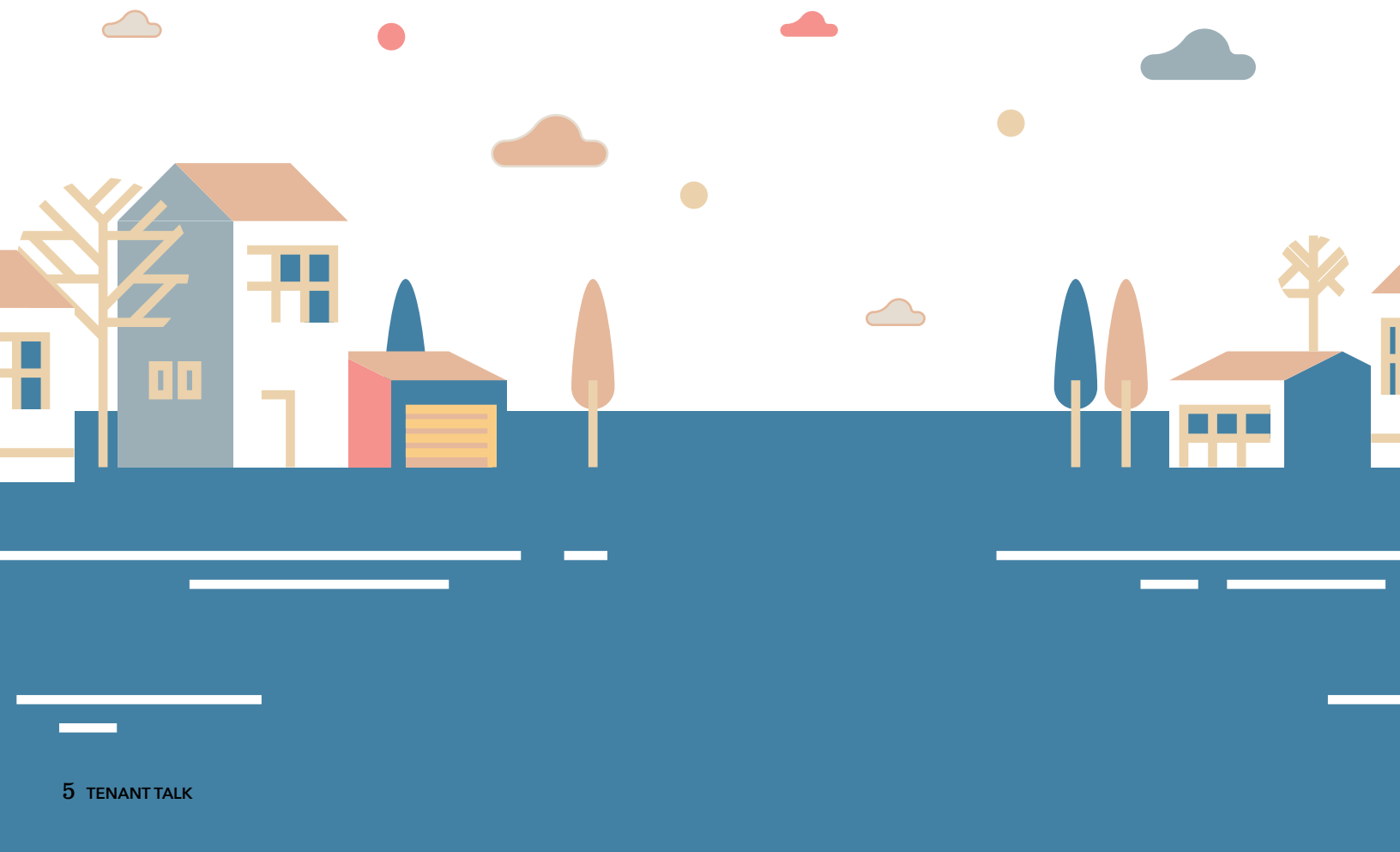
Lea el artículo de la NLIHC *Memo to Members and Partners* (Memorándum para miembros y socios), “President-Elect Biden Announces New COVID-19 Relief Proposal” (El presidente electo Biden anuncia nueva propuesta de ayuda ante el COVID-19): <https://bit.ly/3aQivBD>



Equidad racial y justicia en materia de vivienda

Resumen del año, el camino a seguir

Como se señala en la carta del Consejo Editorial, la equidad racial estuvo en el primer plano de muchos debates políticos, jurídicos y culturales en 2020. Algunos fueron productivos, y la NLIHC se compromete a hacer avanzar estas conversaciones productivas, disipando la retórica a menudo repugnante, y construyendo la voluntad política y la acción concreta para la equidad racial y las soluciones de justicia de vivienda. Siga leyendo para conocer más detalles sobre las conexiones entre la vivienda y la justicia racial.



EL MITO DEL SUBURBIO BLANCO Y LA "INVASIÓN SUBURBANA"

Para atraer a los votantes de los suburbios a finales del verano de 2020, el presidente Trump [tuiteó](#) “que las personas que viven su sueño de estilo de vida suburbano” ya no se verían afectadas en términos financieros por la construcción de viviendas para personas de bajos ingresos en su vecindario”. El tuit se refería a la [eliminación de la norma de promoción afirmativa](#) por parte del presidente, que exigía a los gobiernos locales que abordaran de forma afirmativa la segregación racial, tal y como exigía la Ley de Equidad de Vivienda de 1968. Y continuó: “Los precios de las viviendas subirán en función del mercado, y la delincuencia bajará. He anulado la norma de AFFH de Obama-Biden. ¡Que lo disfruten!”.

El secretario del HUD del presidente Trump, Ben Carson, coincidió con el deseo del presidente Trump de reducir los esfuerzos de aplicación de la equidad de vivienda en el HUD. En un artículo de opinión poco después del tuit del presidente Trump, el entonces secretario Carson afirmó la aborrecible retórica del presidente al afirmar que las prácticas de equidad de vivienda podrían llevar a los suburbios a convertirse en guaridas de “criminales y caos”, sugiriendo que las personas de bajos ingresos son criminales por naturaleza. Este tipo de comentario tiene evidentes elementos racistas, ya que una cantidad desproporcionada de personas con bajos ingresos en este país son negros o hispanos.

Si bien las palabras del presidente Trump y del secretario Carson jugaron con las deplorables percepciones racistas de las personas que viven en viviendas asequibles, la visión de los suburbios que pintan también es incorrecta. La visión exclusiva de las personas blancas de clase media de los suburbios está cambiando rápidamente. A mediados del siglo XX, los blancos huyeron de las ciudades para trasladarse a enclaves periféricos mayoritariamente de personas blancas de clase media, un fenómeno conocido como “[fuga blanca](#)”. El gobierno federal animó a los blancos a trasladarse a los suburbios mediante la construcción de autopistas federales y la concesión de hipotecas a bajo interés a las familias blancas para adquirir viviendas en barrios menos densos y dependientes del automóvil. [Las políticas racistas de segregación residencial](#) como la denegación de préstamos, la discriminación en la vivienda y los convenios racialmente restrictivos, limitaron las oportunidades de las personas de color para seguir el mismo camino.

Pero como todo Estados Unidos, los [suburbios se están diversificando](#). En todo el país, la proporción de blancos no hispanos en los suburbios está disminuyendo a medida que las personas de color [se trasladan a barrios antes mayoritariamente blancos](#) fuera de las áreas metropolitanas centrales. Los investigadores señalan [muchas causas de este cambio](#), como el hecho de que el parque de viviendas suburbanas sea más asequible a medida que pasan

los años, la disminución de los obstáculos para que las personas de color puedan adquirir una vivienda en los suburbios, el aumento del costo de la vivienda y el desplazamiento en las zonas urbanas, y el aumento de las oportunidades laborales fuera de las ciudades.

Aunque los suburbios se hayan diversificado, [esto no significa que estén integrados](#). La fuga blanca ha tomado una [nueva forma](#). Los estudios muestran que a medida que los barrios se hacen más diversos [muchos blancos](#) se van a las afueras o regresan al centro de las ciudades. En algunos casos, los residentes blancos con mayores ingresos están desplazando a las comunidades de color en las zonas urbanas. Como [dice](#) Thomas Sugrue, de NYU Cities Collaborative: “Aunque en conjunto los suburbios son más diversos, la distribución de los no blancos no es aleatoria. Las áreas metropolitanas de Estados Unidos no son un lugar de libre elección de vivienda. Siguen estando muy marcadas por profundos patrones de desigualdad racial y una mala distribución de los recursos”.

En 2011, la Brookings Institution [señaló](#) que muchos suburbios, incluidos los de Houston, Las Vegas y San Francisco, se han convertido en mayoritariamente no blancos, pero los residentes blancos representaban el 73 % del crecimiento en las áreas periféricas más allá de los suburbios. La continua segregación racial puede verse en las ciudades [como Atlanta](#) donde en 2010, el 87 % de la población negra vivía en los suburbios, pero en barrios negros muy segregados.

Mientras los defensores de la vivienda justa se esfuerzan por abordar la segregación residencial, los suburbios ofrecen muchas oportunidades para aumentar la inclusión racial y socioeconómica. Aunque la demografía de los suburbios ha cambiado, el ideal de la casa unifamiliar suburbana en un gran terreno con una cerca de madera no ha desaparecido. Sigue habiendo oposición a la vivienda multifamiliar y al desarrollo denso. Como sugiere el [Urban Institute](#) y defiende la NLIHC, las políticas locales pueden fomentar la inclusión y las oportunidades mediante la construcción de más viviendas asequibles, la aplicación de las protecciones de la equidad en la vivienda, la reforma de las leyes de zonificación restrictivas y la ampliación del acceso a las ayudas al alquiler para los hogares con bajos ingresos.



LOS SUBURBIOS ESTADOUNIDENSES

VIVIENDA, CAMBIO DE VECINDARIO Y EXCESO DE POLICÍA

El verano de 2020 llamó la atención sobre la naturaleza brutalmente opresiva de la policía en las comunidades negras de Estados Unidos. A pesar de los reiterados pedidos de “desfinanciamiento” de los departamentos de policía o la reforma de la justicia penal, las experiencias de las comunidades con exceso de policía no son nuevas. Los estudios sugieren que a medida que los vecindarios sufren cambios, concretamente la gentrificación, son más propensos a ser objeto de un exceso de policía.

El [Urban Displacement Project](#) define la gentrificación como “un proceso de cambio en un vecindario que incluye cambios económicos en un barrio históricamente con falta de inversión (mediante la inversión inmobiliaria y el traslado de nuevos residentes de mayores ingresos, así como el cambio demográfico) no solo en términos de nivel de ingresos, sino también en términos de cambios en el nivel educativo o la composición racial de los residentes”.

La gentrificación suele provocar el desplazamiento físico y cultural de los residentes de toda la vida. Los actuales residentes no pueden pagar los crecientes alquileres o los impuestos sobre la propiedad y se ven obligados a abandonar sus comunidades. Incluso antes de mudarse, muchas comunidades de color experimentan la pérdida de la cultura de su vecindario cuando los recién llegados traen [nuevas normas o culturas al vecindario](#). A menudo, la gentrificación consiste en que los residentes blancos con mayores ingresos se trasladen a comunidades de color. Según el [New York Times](#), “la llegada de residentes blancos está cambiando las comunidades no blancas en ciudades de todos los tamaños, afectando a uno de cada seis regiones censales predominantemente afroamericanas”.

Las investigaciones demuestran que, a medida que aumenta el valor de las propiedades y se instalan nuevos residentes con mayores ingresos, también aumentan las llamadas a la policía. En la ciudad de Nueva York, los [investigadores](#) descubrieron que había más llamadas al 311 de la policía en áreas con un aumento de residentes de clase media y más presencia policial por delitos de bajo nivel en áreas [que experimentan un desarrollo urbano](#). Otro [estudio](#) de la ciudad de Nueva York descubrió que las llamadas al 311 aumentaron en todos los vecindarios entre 2011 y 2016, pero aumentaron un 70 % más rápido en los vecindarios en proceso de gentrificación. Debido a que los blancos [tienden a ver a las fuerzas del orden como algo útil](#), son más propensos a recurrir a la policía para hacer cumplir sus nuevas normas. Los investigadores señalan que no son solo las llamadas a la policía, sino las decisiones activas de los departamentos de policía de aumentar las patrullas para proteger el aumento de las inversiones en áreas de desarrollo comunitario en curso, una práctica denominada “[policía orientada al desarrollo](#)”. “La policía responde a los paisajes segregados, pero también los construye y mantiene”, dice [la Dra. Daanika Gordan de la Universidad Tufts](#).

El aumento de las llamadas a la policía suele ser por delitos de bajo nivel que muestran la fricción entre las culturas de los vecindarios. La [investigación](#) ha demostrado que cuando los nuevos residentes con mayores ingresos se instalan en vecindarios históricamente con falta de inversión, hay más denuncias de delitos no urgentes o llamadas molestas y un aumento de la vigilancia policial o “[exceso de policía](#)”. Cuando la policía se ocupa de cosas como grafitis, personas que deambulan o quejas por ruidos molestos, aumenta la probabilidad de que las interacciones desemboquen en violencia. La periodista Clare Busch [escribe](#), “El ritmo de la gentrificación no solo expulsa a los residentes negros con alquileres más altos, sino que atrae la atención de la policía a través de llamadas al 311, quejas por ruidos molestos y personas que deambulan, y desalojos”.

A medida que los paisajes cambian en muchas ciudades estadounidenses y las comunidades se enfrentan al desarraigo, es esencial que se promulguen políticas de vivienda que aborden el racismo que controla y desplaza a los residentes, invirtiendo dinero en la lucha contra el desplazamiento en lugar de aumentar la presencia policial en los vecindarios. Debemos invertir de forma equitativa en las comunidades desatendidas y crear mejores vecindarios para las personas con bajos ingresos.

Los recursos utilizados para llevar a cabo gran parte de esta labor policial suelen ir en detrimento de los ya escasos presupuestos de servicios sociales e infraestructura. Si los gobiernos de todos los niveles se preocuparan realmente por el bienestar de los ciudadanos, les proporcionarían la más básica de las necesidades: refugio. Un hecho positivo es que la ciudad de Austin ha destinado recientemente parte de los fondos que se destinaban a la vigilancia policial a viviendas de apoyo permanente, lo que es especialmente importante dado el aumento de las personas sin hogar en Austin. Aunque la gente puede estar en desacuerdo con la idea de “desfinanciar a la policía” como lema de campaña, el ejemplo de Austin de redirigir los fondos a soluciones políticas equitativas para la falta de viviendas y la pobreza es un ejemplo de ir más allá de la retórica.

Foto de: Jakayla Toney
Union Square, Manhattan,
Nueva York, NY, USA. Policías
asegurándose de que los
manifestantes no bloqueen
las entradas y las carreteras.



LOS VOTANTES DE LOS ÁNGELES ELIGEN LA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD EN LUGAR DE LAS FUERZAS DEL ORDEN Y EL ENCARCELAMIENTO

El condado de Los Ángeles ofreció a los votantes la oportunidad de elegir cómo gastar los ingresos locales y qué parte del presupuesto debe destinarse a las fuerzas del orden y a las cárceles frente a otras inversiones. La Medida J responde a que el 42 % de los ingresos anuales del condado de Los Ángeles se destinan a las cárceles y al sistema judicial. La Medida J se aprobó el día de las elecciones por un amplio margen, con un voto del 57 % al 43 %. La medida exige que el 10 % de todos los ingresos locales en el futuro se dediquen a inversiones comunitarias, de las cuales la vivienda asequible es un uso elegible. Este 10 % supone unos \$1,000 millones de dólares de inversión al año. Esta modificación de la ley no supone la obtención de nuevos ingresos. Solo establece un requisito legal sobre cómo debe gastarse el presupuesto.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles nombrará ahora un comité de supervisión que decidirá qué inversiones comunitarias se beneficiarán de los ingresos reservados.

Re-Imagine L.A. County impulsó la aprobación de la Medida J, reuniendo una amplia coalición de defensores de la justicia racial, la educación, la vivienda, los sindicatos y la reforma penal. Re-Imagine L.A. County incluyó a dirigentes de United Way of Greater Los Angeles y de varios grupos de vivienda, como la Southern California Association of Non-Profit Housing, Skid Row Housing Trust, Union Station Homeless Services, PATH, Venice Community Housing y muchos otros.



IZQUIERDA: CARTEL DE PROTESTA DE BLACK LIVES MATTER (LA VIDA DE LAS PERSONAS NEGRAS IMPORTA)

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ANTITRANSGÉNERO DEL HUD

La administración de Trump hizo un esfuerzo concertado para eliminar las protecciones y los derechos de la comunidad LGBTQ. Este esfuerzo comenzó el día de asunción del presidente Trump en 2017, cuando la administración eliminó toda mención a las personas LGBTQ de los sitios web de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Trabajo. El HUD fue una de las primeras agencias en promulgar la agenda antitransgénero de la administración de Trump. En marzo de 2017, retiró dos iniciativas del HUD de la era Obama para proteger a las personas LGBTQ de quedarse sin hogar.

En 2019, el HUD anunció sus planes de recortar las protecciones para las personas transgénero y no conformes con el género que se encuentran sin vivienda mediante la eliminación de una disposición crucial en la Norma de Igualdad de Acceso de 2016, un día después de que el ex secretario del HUD, Ben Carson, testificara ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que no se harían tales cambios.

Esta propuesta antitransgénero se dirigía directamente a un grupo que ha sufrido histórica y desproporcionadamente las penurias de la falta de vivienda. Las personas transgénero tienen muchas más probabilidades que la población general de experimentar la falta de vivienda y la discriminación cuando buscan servicios de albergues de emergencia. Según la Encuesta de Transgéneros de 2015 en Estados Unidos, casi un tercio de las personas transgénero experimentan la falta de vivienda en algún momento de su vida y el 70 % denunció maltrato en un albergue debido a su identidad de género. Solo el 50 % de la población LGTBQ+ vive en estados que prohíben la discriminación en la vivienda por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Del 19 % de las personas transgénero que declararon haber estado sin hogar a lo largo de su vida, el 41 % eran negros, el 33 % eran indios americanos, el 32 % eran multirraciales y el 32 % eran latinos. La pandemia del COVID-19 ha afectado de forma desproporcionada a personas históricamente marginadas, y la nueva norma del HUD habría empeorado los efectos ya negativos de la pandemia sobre las jóvenes transgénero de color, una población ya vulnerable a la grave marginación, la hostilidad y la violencia cuando se encuentra en albergues no diseñados para la comunidad LGBTQ.

La campaña "Housing Saves Lives" (La vivienda salva vidas)

En respuesta a la norma propuesta, se lanzó la campaña "La vivienda salva vidas", codirigida por más de 50 organizaciones nacionales y locales, incluyendo la NLIHC, para animar al público a presentar comentarios en contra de la norma durante el periodo de comentarios de 60 días. La campaña colaboró con miembros del Congreso para instar al HUD a anular la norma, organizó una *Semana de acción* con una serie de actos nacionales, reclutó a alcaldes y otros funcionarios públicos de todo el país para que presentaran comentarios públicos y una carta de oposición a la norma, presentó artículos de opinión y contribuyó a artículos de prensa. Se presentaron más de 66,000 comentarios públicos durante el periodo de 60 días, convirtiéndose en la mayor campaña de comentarios sobre un reglamento del HUD de la historia.

Lo que viene: el compromiso de la administración de Biden con la igualdad LGBTQ

Esta propuesta de norma no llegó a publicarse debido, en parte, al éxito de la campaña "La vivienda salva vidas" y a la colaboración de los defensores para oponerse a la nueva norma. La Administración entrante de Biden y la secretaria designada del HUD, Marcia Fudge, tendrán la capacidad de retirar cualquier norma que aún se haya publicado en el *Registro Federal*.

La campaña de Biden/Harris ha expresado su plan de [avanzar en la igualdad LGBTQ en Estados Unidos y en todo el mundo](#). Es importante que la nueva administración y el 117º Congreso se ocupen de inmediato:

- Aprobar la "Ley de Igualdad", que proporcionaría protecciones antidiscriminatorias coherentes y explícitas para las personas LGBTQ en ámbitos clave de la vida, como el empleo, la vivienda, el crédito, la educación, los espacios y servicios públicos, los programas financiados por el gobierno federal y el servicio de jurado.
- Instar a todas las agencias a rescindir las regulaciones anti-LGBTQ hechas por la administración de Trump.
- Abordar las necesidades de vivienda y albergues de emergencia de la comunidad LGBTQ.
- Abordar los problemas de discriminación y violencia contra las personas transgénero, especialmente las mujeres trans negras y latinas.

Gracias

Gracias por unirse a nosotros en la oposición a los esfuerzos del HUD para discriminar a las personas transgénero que se encuentran sin vivienda

PARA ESTAR AL DÍA DE LAS ÚLTIMAS NOTICIAS Y RECURSOS,
VISITE HOUSINGSAVESLIVES.ORG





ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA DE ESTATUS MIXTO DEL HUD

Bajo la administración de Trump, varias agencias, incluyendo el HUD, introdujeron cambios en la política que perjudicarían a las familias inmigrantes de bajos ingresos. Estos cambios normativos no ayudarían a ampliar los recursos para los ciudadanos estadounidenses y otras personas con estatus migratorios elegibles, sino que servirían para impedir que los inmigrantes accedan a ayudas vitales en materia de salud, nutrición y vivienda, especialmente los niños y las personas mayores. La pandemia de COVID-19 ha magnificado las amenazas a las que se enfrentan las familias inmigrantes con bajos ingresos, lo que supone una carga adicional para las familias sujetas a los perjudiciales cambios de política.

En 2019, el HUD propuso cambios en lo que comúnmente se conoce como la “Norma de las familias de estatus mixto”. La norma propuesta impediría que las familias recibieran la mayoría de las ayudas para el alquiler si al menos una persona del hogar no tiene derecho a la asistencia por su estatus migratorio, lo que obligaría a las familias a dividirse, renunciar a la ayuda o enfrentarse al desalojo. La propia estimación del HUD mostró que más de 100,000 personas podrían perder la asistencia debido a esta disposición, incluidos 55,000 niños que son ciudadanos legales de Estados Unidos y tienen derecho a la asistencia para la vivienda. De hecho, dos tercios de las personas de familias de estatus mixto son ya ciudadanos estadounidenses, la mayoría de ellos niños.

La norma propuesta eliminaría la opción de que las familias reciban una asistencia prorrateada, como es la práctica actual del HUD. En su lugar, el estatus migratorio de todos los miembros del hogar menores de 62 años tendría que ser verificado a través del sistema de Verificación sistemática de los derechos de los extranjeros (SAVE) del DHS. Los que no puedan cumplir los nuevos requisitos perderán la asistencia para el alquiler.

Según el [análisis](#) de los datos administrativos del HUD de 2017 del Centro para Prioridades Políticas y Presupuestarias (Center on Budget and Policy Priorities, CBPP), la norma perjudicaría desproporcionadamente a las familias latinas, que constituyen el 85 % de las personas que viven en familias de estatus mixto en los tres programas de ayuda para el alquiler más importantes: Vales de elección de vivienda, viviendas públicas y ayuda para el alquiler basada en proyectos de la Sección 8. El análisis del CBPP también demostró que, entre los 9 millones de ciudadanos que actualmente reciben ayuda para el alquiler del HUD, los que más

riesgo corren de perder la ayuda con esta propuesta son: 72 % de personas de color, 62 % de mujeres, 29 % de niños, 22 % de personas con discapacidad y 17 % de personas mayores.

La administración de Trump afirmó que la nueva política abordaría las listas de espera de asistencia para la vivienda, pero el propio análisis de la agencia encontró que con la norma propuesta menos familias recibirían asistencia para la vivienda. Dado que las familias de estatus mixto no reciben asistencia para la vivienda para los miembros de la familia que no reúnen los requisitos necesarios, la supresión de la asistencia a estos hogares obligaría al HUD a proporcionar subvenciones completas a otras familias que no son de estatus mixto, lo que supondría un costo para el gobierno de al menos \$193 millones de dólares.

En respuesta a la norma propuesta, la NLIHC, el Proyecto Nacional de Leyes sobre Vivienda (National Housing Law Project, NHLP) y otros socios lanzaron la campaña “Keep Families Together” (Mantengan las familias unidas) para movilizar la oposición. Durante el periodo de comentarios públicos, los particulares y las organizaciones presentaron más de 30,450 comentarios; la anterior vez que una propuesta del HUD obtuvo una atención pública significativa dio lugar a poco más de 1,000 comentarios públicos. Un análisis de la NHLP de estos comentarios reveló que más del 95 % de los comentarios se oponían a la norma.

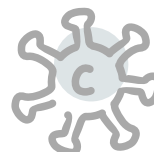
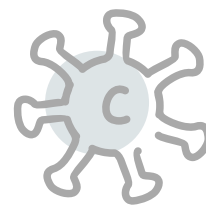
Nunca se publicó una versión final de esta norma en el *Registro Federal* y esperamos que la administración entrante de Biden y la secretaria designada del HUD, Marcia Fudge, retiren la norma.

El último paquete de ayuda ante el coronavirus permite a los hogares de estatus mixto con miembros de la familia indocumentados recibir cheques de estímulo, que se les negaba en virtud de la Ley CARES. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley sigue excluyendo a las familias que declaran sus impuestos con un Número de identificación personal del contribuyente (ITIN) y a unos 2.2 millones de niños ciudadanos. Aunque la inclusión de las familias de estatus mixto fue un paso importante, se necesita más.

La campaña de Biden/Harris [ha expresado](#) su compromiso de deshacer los daños de la administración de Trump y proteger los derechos de los inmigrantes. La nueva administración y el 117º Congreso deben hacerlo inmediatamente:

- [Promover proyectos de ley de ayuda ante el coronavirus que incluyan a las familias de estatus mixto e inmigrantes.](#)
- [Atender las necesidades de las familias inmigrantes de bajos ingresos.](#)
- [Revertir las normativas perjudiciales y otras políticas que limitan el acceso a los programas federales a los que tienen derecho.](#)

SERIE DE SEMINARIOS WEB DE LA NLIHC: EQUIDAD RACIAL Y JUSTICIA EN MATERIA DE VIVIENDA DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA DE COVID-19



Tres destacadas voces del movimiento por la justicia racial se unieron a la NLIHC en 2020 en una serie de seminarios web para hablar de la equidad racial y la justicia en materia de vivienda durante y después de la pandemia de coronavirus: El Dr. Ibram X. Kendi, autor de *How to Be an Antiracist* y *Stamped from the Beginning*; Nikole Hannah-Jones, creadora y autora, ganadora del premio Pulitzer, del "Proyecto 1619" de la revista *New York Times*; y Ta-Nehisi Coates, ganador del Premio Nacional del Libro (National Book Award) por *Between the World and Me*. Estos debates transmitidos en directo estuvieron abiertos al público y contaron con la asistencia de miles de personas.

Aunque cada orador invitado compartió su propia perspectiva, de la serie surgieron tres temas: 1) Estados Unidos tiene una profunda historia de racismo, y las políticas de vivienda racistas han desempeñado un papel clave en el fomento de su daño, que todavía se experimenta profundamente en la actualidad; 2) la pandemia de coronavirus está exponiendo y exacerbando el racismo estructural en Estados Unidos, pero también ofrece una oportunidad para abordarlo; y 3) el cambio es posible.

El Dr. Kendi inició la serie en mayo con la presidenta

y directora general de la NLIHC, Diane Yentel, para hablar de lo que significa ser antirracista y de los pasos concretos que la comunidad de la vivienda puede dar para promover políticas y programas antirracistas en materia de vivienda. El Dr. Kendi describió el ser antirracista como una disciplina más que como una definición de alguien y destacó la importancia de reconocer y nombrar el racismo donde existe para crear un cambio real. Animó a los defensores de la vivienda a utilizar los datos para evaluar las políticas como racistas o antirracistas, para garantizar que los fondos del gobierno lleguen a las personas más necesitadas y para asegurarse de que las personas directamente afectadas estén incluidas en cada paso del camino.

Nikole Hannah-Jones habló con la presidenta de la Junta Directiva de la NLIHC, Marla Newman, en julio, durante un momento especialmente crítico del movimiento Black Lives Matter (La vida de las personas negras importa) tras los asesinatos policiales de George Floyd y Breonna Taylor. La Sra. Hannah-Jones aportó su profundo conocimiento de la conexión entre la vivienda y la justicia racial al debate, hablando extensamente sobre la importancia del lugar donde uno vive, la segregación de la vivienda y las políticas

de equidad de vivienda, la brecha de riqueza racial, y lo que debe suceder para deshacer la supremacía blanca y el racismo sistémico en nuestro país. Calificó la segregación en materia de vivienda como una desigualdad arquitectónica y dijo que, puesto que fue creada mediante una política gubernamental, también debe deshacerse del mismo modo.

Ta-Nehisi Coates cerró la serie de seminarios web sobre justicia racial de 2020 con la presidenta y directora general de la NLIHC, Diane Yentel. El Sr. Coates se basó en los puntos que la Dra. Kendi y Hannah-Jones expusieron sobre la historia de las políticas de vivienda racistas en los EE. UU. y las formas en que han afectado a las comunidades de color, particularmente nuevas durante la pandemia de COVID-19. Habló de las consecuencias de las elecciones presidenciales de 2016, del impulso de los movimientos de justicia racial contra la violencia policial que crecieron en 2020, de las posibilidades que se presentan con las elecciones presidenciales de 2020 y de las medidas que debemos tomar para dismantlar el racismo estructural.



DR. IBRAM X KENDI



TA-NEHISI COATES



NIKOLE HANNAH-JONES

MARCO PARA UNA RESPUESTA EQUITATIVA A LA FALTA DE VIVIENDA ANTE EL COVID-19

La NLIHC, la National Alliance to End Homelessness, el Center on Budget and Policy Priorities, el National Health Care for the Homeless Council, el National Innovations Service, el Urban Institute, Barb Poppe and associates y Matthew Doherty Consulting han colaborado en la elaboración de un Marco para una respuesta equitativa a la falta de vivienda ante el COVID-19 para ayudar a garantizar que los estados y las jurisdicciones utilicen eficazmente los recursos federales para hacer frente a las crisis sanitarias y económicas creadas por la pandemia de COVID-19. El Marco ofrece orientaciones para abordar el racismo estructural, un factor clave de por qué las personas de color son las más afectadas por la pandemia y están sobrerrepresentadas en el sistema de personas sin hogar.

Para ayudar a las personas que se encuentran desprotegidas sin hogar, el Marco insta a las comunidades a priorizar el acceso a los tan necesarios recursos de seguridad e higiene (por ejemplo, aseos, estaciones de lavado de manos, duchas, etc.). El personal del programa también debe centrarse en poner en contacto a las personas sin hogar con albergues no colectivos (como hoteles, moteles y residencias) para permitir el distanciamiento social, el aislamiento y la cuarentena, así como poner en contacto a las personas con servicios de atención médica y vías de acceso a una vivienda permanente. El Marco sugiere que las comunidades involucren a las personas que hayan tenido que pasar por esta experiencia y a las organizaciones de base para mejorar los servicios para las personas sin hogar.

La recomendación del Marco para los sistemas de albergues es que por ahora sigan siendo no colectivos, para reducir el trauma y crear un espacio más seguro y saludable para los receptores. El Marco también establece que los albergues sigan siendo o pasen a ser de fácil acceso, que estén abiertos las 24 horas del día, que respeten la cultura, que no sean discriminatorios (incluyendo la raza, la expresión de género y la identidad sexual), que sean accesibles para las personas con discapacidades y que reciban familias.

El Marco incluye recomendaciones para acabar con la falta de vivienda, como la ampliación del acceso a diferentes programas de vivienda para las personas sin hogar. Estos programas incluyen viviendas de apoyo permanente, realojamiento rápido y subsidios para una vivienda de alquiler asequible. Las comunidades también deben reforzar los esfuerzos de participación de los propietarios y garantizar la igualdad de acceso a los recursos sobre la base de los aportes de las personas que hayan tenido que pasar por esta experiencia y el análisis de los datos.

Para reforzar los servicios de prevención y desviación de la falta de vivienda, el Marco aconseja a las comunidades que den prioridad a las actividades dirigidas a las personas con mayor riesgo de quedarse sin hogar, incluyendo las personas que ya han tenido que pasar por esto, las personas más afectadas por el



El Marco para una respuesta equitativa a la falta de vivienda ante el COVID-19

#HousingEquity

COVID-19, las personas con los ingresos más bajos y las personas cuyas redes de apoyo tienen menos recursos. Las comunidades deben tener mayor conocimiento de los servicios que necesitan las diferentes subpoblaciones y adaptar los enfoques adecuadamente.

Para reforzar los sistemas de cara al futuro, el Marco sugiere que las comunidades den prioridad a las actividades para reforzar los sistemas de respuesta a la falta de vivienda mediante la evaluación de los datos y la consulta a las personas que han pasado por este tipo de experiencias. Las comunidades también deben integrar los principios de justicia racial y equidad en sus enfoques para acabar con la falta de vivienda, crear asociaciones más fuertes entre los sistemas y sectores, y adoptar políticas para proteger a los inquilinos (como las prohibiciones de discriminación por la fuente de ingresos, la zonificación de inclusión y la focalización de recursos) a nivel local, estatal y federal.

Para apoyar estas actividades, el Marco recomienda utilizar mecanismos de financiación como: Dólares de asistencia pública de la FEMA, subvenciones federales para soluciones de emergencia, subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario, fondos federales de ayuda contra el coronavirus y subvenciones filantrópicas.

Además del Marco, se creó un conjunto de [recursos y herramientas](https://housingequityframework.org/resources) para ayudar a las organizaciones a ponerlo en práctica, que se pueden encontrar en: <https://housingequityframework.org/resources>. Estos recursos incluyen información sobre fuentes de financiación y actividades permitidas; reglamentos y diseño de programas de estados, condados, ciudades, pueblos, centros de atención continua (Continuums of Care) y organizaciones sin fines de lucro; orientación, información y normas federales; lugares donde buscar más recursos; herramientas interactivas; y videos e infografías.

Utilizando el Marco y sus recursos, las comunidades pueden proporcionar una atención equitativa a las diferentes subpoblaciones afectadas por la pandemia de COVID-19. Sin una planificación inteligente y unos niveles de inversión adecuados, la cantidad de familias sin hogar aumentará, especialmente entre las comunidades de color.



ANDREW ANDERSON DE
MIRIAM'S KITCHEN

RESIDENT PERSPECTIVE

POR ANDREW ANDERSON

UTILIZAR LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS PARA IMPULSAR EL CAMBIO

Como tantos otros en Estados Unidos, me encontré sin hogar cuando salí de la cárcel. Eso fue hace dos años, pero aún sigo sin hogar.

Poco después de salir de la cárcel, me invitaron a participar en una reunión de la Coalición de Personas por la Equidad (People for Fairness Coalition, PFFC). La PFFC es un grupo con sede en DC dirigido por personas que han vivido la falta de vivienda y que trabajan para acabar con la inestabilidad de la vivienda en el área metropolitana de DC a través de la defensa, la divulgación y la tutoría entre pares. En mi primera reunión hablamos de cómo podíamos abordar el problema de los campamentos de personas sin hogar: cómo podíamos llegar a las personas que viven en campamentos y cómo hablar con los concejales sobre los problemas a los que se enfrentan los residentes de los campamentos. No sabía mucho sobre los campamentos, pero quería informarme más, así que seguí yendo a las reuniones y finalmente me hice miembro de la PFFC. Con el tiempo aprendí mucho sobre la divulgación, sobre cómo establecer contactos con los concejales de DC, y finalmente testifiqué en una audiencia pública sobre lo que supone ser un ciudadano recién salido de la cárcel que se encuentra sin hogar. Este testimonio me llevó a hablar en privado con un concejal, lo que me inspiró a participar más en la PFFC.

La PFFC trabaja en cinco iniciativas: una iniciativa de baños públicos para garantizar que las personas sin hogar, y otras, puedan acceder a ellos; el establecimiento de un derecho universal a la vivienda en D.C.; la lucha contra la discriminación, actualmente centrada en la incorporación de las personas sin hogar como clase protegida en virtud de la Ley de Derechos Humanos de D.C.; la organización de la vigilia anual en memoria de las personas sin hogar en

D.C. para honrar a quienes murieron sin la dignidad de un hogar; y divulgación sobre el COVID-19. Paso mucho tiempo con nuestro grupo de divulgación sobre el COVID-19, formado en respuesta a la pandemia. Muchos programas ya no están disponibles por el cierre de lugares, así que todas las semanas vamos a los campamentos de personas sin hogar y les proporcionamos ropa, comida, artículos de aseo e información sobre dónde pueden obtener servicios.

En el último año he crecido como líder del grupo y ahora soy el director de divulgación de la PFFC. Esto no ocurrió de la noche a la mañana; llevó tiempo. Pero mi deseo de ayudar a las personas que pasan por lo mismo que yo me empuja a seguir adelante. Estoy orgulloso de formar parte de ella. Gracias a mi paso por la PFFC, además de mi experiencia personal, estoy dirigiendo los esfuerzos de divulgación para los ciudadanos que regresan de la cárcel y se encuentran sin hogar. Espero utilizar las habilidades que he desarrollado para establecer relaciones con mis pares y crear programas que apoyen a las personas que salen del sistema de justicia penal.

Además de mi trabajo con la PFFC, también tengo un trabajo a tiempo parcial como becario de defensa en Miriam's Kitchen (MK). MK es una organización de DC que se dedica a poner fin al mal crónico de la falta de vivienda a través de comidas, gestión de casos, divulgación en la calle, viviendas de apoyo permanente y defensa. En este puesto puedo utilizar mi voz y mi experiencia para abogar por soluciones al problema de la falta de vivienda, y tengo la oportunidad de hablar con mis pares que no tienen hogar sobre cómo pueden participar también. Al igual que yo, mis compañeros de trabajo creen que las personas que han vivido en

situación de calle deben liderar el trabajo para terminar con este problema. Estoy agradecido de estar en este equipo.

Como becario de defensa, me concentro en cómo podemos mejorar los sistemas de vivienda y eliminar las barreras a las que se enfrentan muchas personas cuando intentan encontrar un lugar donde vivir. Por ejemplo, se podrían mejorar los procesos para que los ciudadanos puedan obtener sus vales de manera más rápida. Además, DC tiene que hacer mucho más para evitar que los propietarios discriminen a las personas con vales, que son principalmente negros y gente de color. El Distrito puede evitar esta forma de discriminación racial haciendo que se apliquen las protecciones para las personas que tienen vales y emitiendo sanciones para los que violen estas protecciones. Hay muchas cosas que podemos hacer para que todo funcione mejor para las personas sin hogar. Me alegro de haber tenido la oportunidad de participar en este trabajo.

El año pasado hubo muchos desafíos con el COVID, especialmente para las personas que no tienen hogar. Mi experiencia mientras estaba en la cárcel y al ver la inestabilidad y las luchas de mis vecinos sin hogar me ha incentivado a ayudar, aunque yo también me encuentre sin vivienda. Creo firmemente que mis vecinos sin vivienda son personas con objetivos y deseos, y que tenemos que trabajar juntos para crear un sistema de vivienda que nos trate como seres humanos. Mi trabajo con la PFFC y MK consiste en hacer cambios para que nuestros vecinos sin vivienda tengan una vida mejor.

Si está interesado en saber más sobre People for Fairness Coalition y Miriam's Kitchen, visite sus sitios web en pffcdc.org y miriamskitchen.org.

RESIDENT PERSPECTIVE

POR ZELLA KNIGHT

QUE SE HAGA JUSTICIA EN MATERIA DE VIVIENDA EN LOS ÁNGELES

La Red de Residentes Unidos (RUN) de Los Ángeles es un gran equipo de líderes y defensores, y me siento honrada de haber sido elegida recientemente como presidenta de nuestro grupo. Nuestro objetivo es mantener el camino hacia más viviendas y aumentar la capacidad de los residentes de viviendas asequibles, constructores de viviendas, proveedores de servicios y defensores de la justicia en materia de vivienda.

RUN LA es diversa en términos geográficos y demográficos, ya que representa áreas rurales, suburbanas y urbanas. RUN es un modelo único en su clase para generar poder entre los residentes que viven en viviendas asequibles y en programas de apoyo a la vivienda. Buscamos el desarrollo del liderazgo, la creación de relaciones y el poder colectivo para alinear a todas las partes interesadas con la causa de la justicia en materia de vivienda y la llamada de atención para terminar con la falta de vivienda.

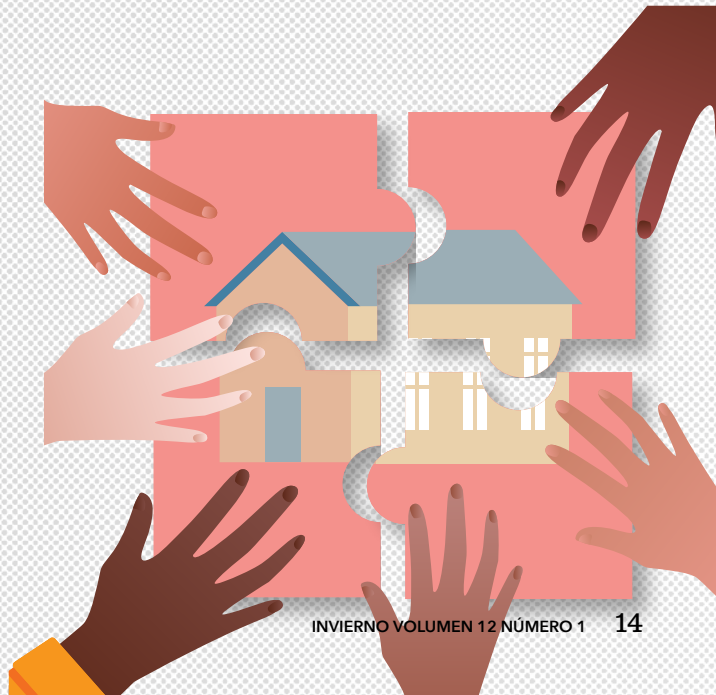
Mi identidad como estadounidense discapacitada descendiente de esclavos y activista generacional, con experiencia personal de falta de vivienda, inestabilidad e inseguridad en la vivienda, hace que me apasione la búsqueda de soluciones que pongan fin a la continua desvalorización y eliminación de las personas marginadas creada por políticas, estructuras y sistemas institucionales y sistémicos. Estos son los factores que contribuyen a la falta de viviendas asequibles y al aumento del número de personas negras y de color sin hogar. RUN LA trabaja para garantizar que los que hemos vivido la experiencia estemos en el centro del proceso de toma de decisiones para las nuevas viviendas de alquiler, desde su construcción hasta su implementación. RUN LA pretende eliminar todas las barreras sociales, desde el racismo, el sexismo y la discriminación contra las personas con discapacidad hasta los prejuicios de género y económicos (como la discriminación por el origen de los ingresos), especialmente en lo que respecta a la política de vivienda.

RUN LA, a través de su compromiso con la comunidad y sus socios, seguirá esforzándose por conseguir un cambio transformador en la política de vivienda asequible y de falta de vivienda a nivel nacional, estatal y local. Durante la crisis del coronavirus, RUN LA y sus socios seguirán procurando que los

residentes y otras personas que se encuentren en situaciones vulnerables estén protegidos al máximo. Como defensora y líder de siempre, mi misión es hacer que lo cómodo sea incómodo hasta que el cambio transformador se convierta en acción, aportando soluciones y resultados, no retórica.

No estoy sola en esto. Nuestro movimiento está en constante crecimiento, y le agradezco a los otros excelentes líderes de RUN LA, como Verica Mancich, Emily Martiniuk, el instructor Ron Crockett, Theresa Winkler y Andrew Ito, entre otros. Nuestro trabajo hacia el éxito recién ha comenzado.

La vivienda asequible es un derecho humano para TODOS.



COALICIÓN PARA LA VIVIENDA RURAL DE CALIFORNIA

Los defensores de la vivienda de todo el país están reconociendo el poder y la importancia de utilizar los datos desglosados por raza y género para avanzar en la equidad racial a través de sus esfuerzos legislativos.

La Coalición para la Vivienda Rural de California (California Coalition for Rural Housing, CCRH) y la Corporación de Asistencia a la Comunidad Rural (Rural Community Assistance Corporation, RCAC) realizaron un estudio para determinar las condiciones actuales de vivienda y de vida de las comunidades tribales de California. Parte de la investigación y los datos informaron la “Evaluación final de la vivienda en todo el estado 2025” creada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California.

La investigación pone de manifiesto las disparidades entre los indios americanos de California y la población en general. El estudio reveló que casi un tercio de los habitantes de las zonas tribales de California viven por debajo del umbral federal de pobreza, más del doble que la población general. Los indios americanos también se enfrentan a una mayor necesidad insatisfecha de rehabilitación de viviendas y de nuevas construcciones. Las viviendas disponibles se encuentran en condiciones deplorables: el 60 % de las viviendas ocupadas por indios americanos se construyeron hace más de tres décadas, y casi una quinta parte necesita importantes mejoras físicas. También tienen sistemas de agua y aguas residuales más deficientes.

La CCRH y la RCAC pueden demostrar a través de estos datos el impacto que ha tenido para los indios americanos la exclusión de las naciones tribales de los programas estatales de vivienda. La exclusión de las naciones tribales las ha obligado a depender en gran medida de recursos federales crónicamente insolventes. Para corregir esta disparidad histórica, la CCRH y la RCAC recomendaron que se reformaran los programas estatales de vivienda para permitir la participación de las tribus de California y las entidades tribales de vivienda.

BALTIMORE RENTERS UNITED

Baltimore Renters United (BRU), una coalición de defensores de la comunidad, hizo campaña para la aprobación del proyecto de ley 20-065 del Consejo, “Derecho a un abogado en los casos de desalojo”, que otorga a los inquilinos de la ciudad de Baltimore el derecho legal a un abogado en los casos que puedan dar lugar a un desalojo.

Como parte de sus esfuerzos de defensa, BRU utilizó un informe de investigación preparado por Stout [El impacto económico de un derecho a un abogado en casos de desalojo en la ciudad de Baltimore](#) para ilustrar las disparidades a las que se enfrentan las comunidades de color en materia de desalojos. Debido a las leyes y prácticas históricas de segregación, así como a la continua desinversión en las comunidades negras, las familias negras son desalojadas en un 13 % más que las familias blancas con la misma situación económica. Las mujeres negras son desalojadas en un 296 % más que los hombres blancos.

En Baltimore se presentan 140,000 casos de desalojo al año y se ejecutan casi 70,000 desalojos. Los propietarios y los tribunales desalojaron a más de 537 familias entre agosto y noviembre de 2020. En esos casos de desalojo, solo el 1 % de los inquilinos tenía abogado, frente al 96 % de los propietarios. Aproximadamente 6,500 familias, principalmente negras, fueron desplazadas de sus viviendas. Para los inquilinos que se enfrentan a un desalojo, tener representación legal es a menudo la diferencia entre tener una vivienda o quedarse sin ella.

Al utilizar eficazmente los datos desglosados por género y raza, BRU consiguió ampliar los derechos de los inquilinos. Baltimore es ahora la séptima jurisdicción del país en promulgar el derecho a un abogado para evitar quedarse sin vivienda y los desplazamientos perturbadores, especialmente entre las comunidades negras.

MINNESOTA HOUSING PARTNERSHIP Y OREGON HOUSING ALLIANCE



Muchas organizaciones están incorporando los principios antirracistas en sus operaciones, programas y agenda política, incluidos los socios estatales de la NLIHC, Minnesota Housing Partnership y Oregon Housing Alliance.

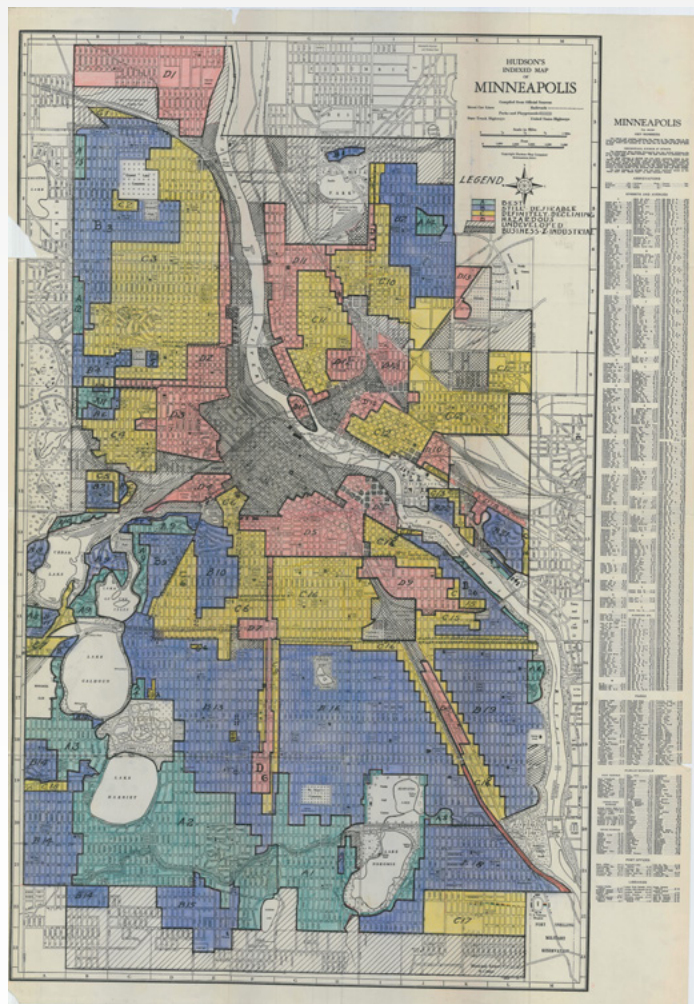
Minnesota Housing Partnership (MHP) estableció un Grupo asesor de políticas públicas (PPAG) para revisar sus políticas y hacer recomendaciones sobre cómo asegurar mejor la equidad racial en el trabajo de MHP. Los miembros del PPAG representan una gama de perspectivas, antecedentes y experiencia y, en el transcurso de cinco meses, desarrollaron un marco de equidad para guiar el desarrollo de la política de MHP. El marco de equidad se basó en parámetros como: aumentar el acceso a viviendas seguras y asequibles para los residentes de las minorías y aumentar las oportunidades económicas para los promotores, contratistas y subcontratistas de las minorías. El grupo tiene previsto ampliar y perfeccionar continuamente estos parámetros.

El trabajo de MHP y el PPAG dio como resultado el envío de cartas a los funcionarios electos y a los líderes estatales, incluyendo a la comisionada de Minnesota Housing, instándola a aumentar los recursos para los propietarios de viviendas de las minorías, especialmente teniendo en cuenta el impacto que el COVID-19 ha tenido en la ampliación de las disparidades de vivienda para las comunidades de color y los hogares de bajos ingresos. Otras recomendaciones de la carta incluían el uso de datos para guiar los cambios en la política y los programas, la preservación de los terrenos públicos para viviendas públicas y asequibles, el apoyo a las viviendas asequibles de origen natural, la mejora de las protecciones para los trabajadores y la inclusión del desarrollo de la mano de obra en las estrategias de Minnesota Housing para acabar con las disparidades raciales.

Neighborhood Partnerships, la organización que convoca a Oregon Housing Alliance, también adoptó un marco de equidad racial que describe explícitamente los objetivos para promover la equidad racial en su trabajo en materia de vivienda. El plan fue desarrollado durante un año por el personal de Neighborhood Partnerships, su equipo de equidad y el Centro de equidad e inclusión.

Los objetivos de equidad de Oregon Housing Alliance incluyen el desarrollo de una lente de equidad para evaluar las políticas y ayudar a crear su agenda legislativa de 2021, y también aumentar la toma de decisiones compartida con Residents Organizing for Change. Para trabajar en pos de estos objetivos, Neighborhood Partnerships adoptó numerosas medidas internas y externas. A nivel interno, han revisado sus prácticas de contratación e incorporación de empleados; han utilizado datos demográficos y raciales para orientar la asignación de recursos; han modificado los límites de los mandatos de su junta directiva y han diversificado sus miembros; y han revisado su proceso de obtención de información. A nivel externo, han puesto en marcha una red de inquilinos de viviendas asequibles y se han comprometido a garantizar que el proceso de toma de decisiones de Oregon Housing Alliance sea más inclusivo. Para crear responsabilidad, publicaron sus objetivos, las medidas de los resultados y el progreso hacia estos objetivos en su sitio web y actualizaron a los miembros en sus boletines electrónicos mensuales.

Neighborhood Partnerships también creó una declaración de equidad racial que los compromete a trabajar por "un Oregon mejor, en el que todos tengamos acceso a las oportunidades, la estabilidad y lo que necesitamos para prosperar". Reconoce que las personas blancas han creado y se han beneficiado de instituciones, políticas, leyes y sistemas de opresión que han negado a las personas de color el poder, los recursos y el acceso. Para lograr sus objetivos, estos sistemas deben interrumpirse.



MAPA DELIMITADO DE MINNEAPOLIS, MINNESOTA

Actualización de la ayuda ante el COVID/del gasto federal

El Congreso aprobó y el entonces presidente Trump firmó una ley de gasto federal para el año fiscal (FY) 2021 el 27 de diciembre. Además de proporcionar fondos esenciales para los programas federales de vivienda asequible y desarrollo comunitario, el proyecto de ley también proporcionó una ayuda vital, aunque limitada, ante el COVID-19, incluyendo \$25,000 millones de dólares en ayuda de emergencia para el alquiler y una prórroga de un mes de la moratoria federal de desalojo emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En general, el proyecto de ley de gastos proporcionó al HUD \$49,600 millones de dólares, lo que supone un aumento de \$561 millones de dólares con respecto a los niveles de financiación aprobados para el año fiscal 2020. El Congreso rechazó claramente la petición del ex presidente Trump de recortar drásticamente los beneficios de vivienda que ayudan a millones de personas mayores, personas con discapacidades, familias con niños, veteranos y otras personas de bajos ingresos a pagar sus casas. Para más detalles sobre el proyecto de ley de gastos para el año fiscal 2021, consulte el cuadro presupuestario de la NLIHC: https://nlihc.org/sites/default/files/NLIHC_HUD-USDA_Budget-Chart_FY21.pdf

Aunque estas disposiciones proporcionaron una asistencia urgente, todavía no es suficiente para satisfacer el nivel de necesidad. El 14 de enero, el presidente electo Biden dio a conocer una propuesta de \$1,9 billones de dólares para un paquete de ayuda integral que incluía una prórroga de la moratoria federal de desalojos hasta septiembre de 2021; \$30,000 millones de dólares en ayudas de emergencia para el alquiler y los servicios públicos; y \$5,000 millones de dólares para atender las necesidades sanitarias y de vivienda de las personas sin hogar.

En el momento de escribir este artículo, el Congreso se está moviendo rápidamente para aprobar un proyecto de ley de ayuda ante el COVID-19. Los líderes demócratas están avanzando en el proceso de reconciliación presupuestaria que permite al Congreso aprobar un paquete de ayuda con una mayoría simple de 51 votos en el Senado. Después de que el Congreso aprobara una resolución presupuestaria que fijara el límite máximo de gasto para un paquete de ayuda, los comités individuales votaron los proyectos de ley de gasto individuales para los programas dentro de sus jurisdicciones antes de que se combinen en un paquete completo para las votaciones finales. El Congreso y la Casa Blanca pretenden promulgar un nuevo proyecto de ley de ayuda para el COVID para mediados de marzo, cuando expiran las ampliaciones de beneficios de desempleo y otros recursos.

La presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters (D-CA), publicó un [proyecto de ley de ayuda ante el COVID-19](#)

que [proporcionaría los recursos que se necesitan de manera urgente](#) para los inquilinos de más bajos ingresos de Estados Unidos y las personas que se encuentran sin vivienda.

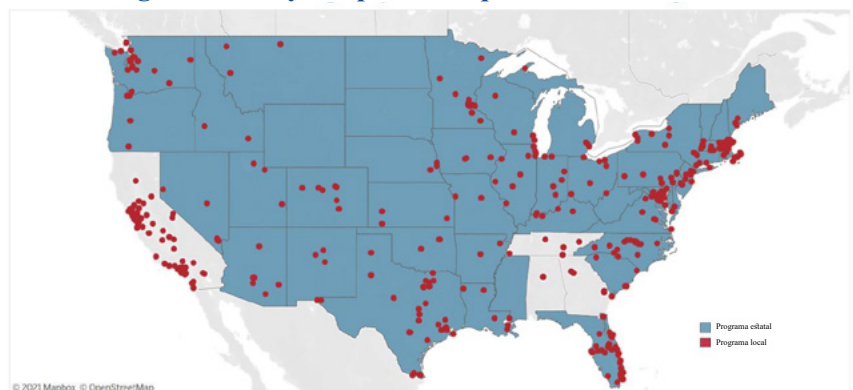
El proyecto de ley prevé \$25,000 millones de dólares en ayudas para el alquiler, entre ellas: \$19,050 millones de dólares para la ayuda de emergencia para el alquiler (ERA); \$5,000 millones de dólares para vales de vivienda de emergencia; \$750 millones de dólares para las necesidades de vivienda de las tribus; y \$100 millones de dólares para las viviendas rurales. El proyecto de ley también prevé \$5,000 millones de dólares para ayudar a las personas sin hogar con asistencia inmediata y a largo plazo, \$9,960 millones de dólares para ayudas para los propietarios de viviendas y \$100 millones de dólares para asesoramiento en materia de vivienda. En otro proyecto de ley se prevén otros \$4,500 millones de dólares para ayudas para los servicios públicos a través del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP).

Si se promulgan, estas inversiones ayudarán a evitar que millones de personas de bajos ingresos [pierdan sus hogares](#) durante la pandemia y proporcionarán a las ciudades y los estados los recursos que necesitan para ayudar a las personas sin hogar a [tener una vivienda segura durante y después de la pandemia](#).

Repaso de los programas estatales y locales de ayuda de emergencia para el alquiler en 2020

El paquete de ayuda ante el COVID-19 aprobado a finales de 2020 proporciona una ayuda muy necesaria para los inquilinos. Destina \$25,000 millones de dólares a ayudas de emergencia para el alquiler y prorroga la moratoria federal de desalojos dictada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que el Presidente Biden prorrogó hasta el 31 de marzo. El anterior paquete de ayuda (la Ley CARES) incluía varias vías de financiación que los estados y las jurisdicciones locales podían utilizar para la

Programas de ayuda para el alquiler ante el COVID-19



© 2021 Mapbox © OpenStreetMap

ayuda de emergencia para el alquiler, lo que dio lugar a un patrón desigual de jurisdicciones que eligieron desarrollar programas de ayuda de emergencia para el alquiler. El último paquete de ayuda ante el COVID-19 exige que los estados y las jurisdicciones locales utilicen los fondos en ayudas de emergencia para el alquiler y/o servicios públicos.

Entre marzo y diciembre de 2020, la NLIHC identificó más de 500 programas de ayuda de emergencia para el alquiler creados o ampliados como respuesta a la pandemia de COVID-19. A finales de año, 45 estados, 385 jurisdicciones locales y el Distrito de Columbia habían puesto en marcha programas de ayuda de emergencia para el alquiler en respuesta a la pandemia, con al menos \$4,400 millones de dólares dedicados a la ayuda para el alquiler. La mayoría de los programas solo proporcionaron asistencia a corto plazo (tres meses o menos), aunque la pandemia ha perdurado durante mucho más tiempo. La mayoría de los programas pedían a los hogares que demostraran las dificultades económicas relacionadas con el COVID, la elegibilidad de ingresos y una prueba de residencia en la jurisdicción. Pocos programas se dirigieron específicamente a los inquilinos con ingresos extremadamente bajos.

La NLIHC sigue haciendo un seguimiento de los programas y actualiza semanalmente su base de datos en línea de estos programas. Encuentre un programa de ayuda de emergencia para el alquiler cerca de usted en: <https://nlihc.org/rental-assistance>.

Los nuevos \$25,000 millones de dólares de ayuda de emergencia para el alquiler contribuirán significativamente a satisfacer las necesidades de los inquilinos que necesitan ayuda para el alquiler. Sin embargo, basándose en la investigación de la NLIHC y en los grupos de trabajo en curso, los programas pueden hacer varias cosas para ayudar a los inquilinos de manera más eficiente y eficaz. Los defensores deben instar a los programas a (1) simplificar su proceso de solicitud de ayuda para el alquiler y permitir que las personas presenten su solicitud por Internet, teléfono y correo; (2) exigir menos documentos a los inquilinos y permitir la autocertificación como forma de documentación; (3) asociarse con organizaciones locales para llegar a los inquilinos y ayudarles en el proceso de solicitud; y (4) enfocarse más en los ingresos para garantizar que los inquilinos con mayores necesidades reciban ayuda. Por último, aunque los \$25,000 millones de dólares ayudarán a satisfacer las necesidades de muchos inquilinos, siguen siendo necesarios más fondos para la ayuda de emergencia para el alquiler. (Para obtener más información, vea el artículo relacionado sobre la propuesta del Presidente Biden y un proyecto de ley del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes).

Resumen de las protecciones contra el desalojo durante la pandemia de COVID-19

Nota: es posible que haya habido más medidas federales entre la publicación de este artículo y el momento en que usted lo está leyendo.

Los desalojos y la falta de vivienda tienen enormes consecuencias para las personas, sus comunidades y la salud pública de nuestra nación. Las familias desalojadas de sus hogares y obligadas a compartir la vivienda con una o dos familias tienen mayores dificultades para mantener el distanciamiento social. Las personas sin hogar son más vulnerables a un brote de enfermedades altamente contagiosas como el COVID-19.

Reconociendo que las prohibiciones de desalojo son una importante herramienta de salud pública para prevenir la propagación del coronavirus, el gobierno federal emitió dos moratorias temporales de desalojo por falta de pago del alquiler durante la pandemia de COVID-19. Además de las protecciones

federales contra el desalojo promulgadas a través de la "Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES)" y luego por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), muchos gobernadores y funcionarios locales promulgaron protecciones estatales y locales contra el desalojo.

Moratoria de desalojos y ejecuciones hipotecarias de la Ley CARES

La Ley CARES, promulgada el 27 de marzo de 2020, detuvo todas las acciones de desalojo en cualquier propiedad que reciba financiación federal durante 120 días. La moratoria prohibía a los propietarios de los inmuebles cubiertos presentar nuevos desalojos contra los inquilinos por falta de pago y cobrar tasas adicionales relacionadas con la falta de pago. En virtud de la prohibición de desalojo de la Ley CARES, los proveedores de vivienda debían proporcionar a los inquilinos un aviso de desalojo de 30 días, que no podía darse hasta después de que la moratoria de 120 días terminara el 24 de julio de 2020.

Si bien la moratoria de la Ley CARES proporcionó importantes protecciones, no impidió que los inquilinos acumularan deudas en materia de vivienda. Además, era difícil para los inquilinos saber si estaban protegidos por la Ley CARES, lo que permitía a algunos propietarios seguir desalojando a los inquilinos a pesar de la prohibición federal. La prohibición solo protegió al 30 % de los inquilinos de todo el país, lo que dejó a muchos hogares de bajos ingresos en riesgo de perder sus casas durante la pandemia.

Moratoria nacional de desalojos de los CDC

El 1 de septiembre, los CDC emitieron una moratoria nacional que impedía la mayoría de los desalojos por no pagar el alquiler. Los CDC emitieron la prohibición nacional de desalojos después de que expiraran muchas protecciones estatales y federales contra los desalojos, incluida la moratoria de la Ley CARES. La moratoria proporciona una protección esencial a millones de inquilinos, pero éstos deben seguir pagando los alquileres atrasados cuando la moratoria expire. Las protecciones de la moratoria de los CDC no son automáticas. Para estar protegidos por la orden de los CDC, los inquilinos deben presentar una declaración firmada al propietario en la que indiquen que cumplen determinados requisitos. Para obtener más información, consulte estas preguntas frecuentes para inquilinos creadas por la NLIHC y el National Housing Law Project: <https://bit.ly/36oHD0L>

La moratoria nacional expiraba inicialmente el 31 de diciembre de 2020, pero el Congreso aprobó en diciembre un proyecto de ley de emergencia ante el COVID-19 que prorrogó la moratoria federal de desalojos hasta el 31 de enero de 2021. El primer día de mandato del presidente Joe Biden, éste emitió una orden ejecutiva en la que se instruía a los CDC para que prorrogara la moratoria federal de desalojos hasta marzo de 2021, que fue lo que hizo la directora de los CDC, Rochelle Walensky. La ley de ayuda ante el COVID-19 también proporciona \$25,000 millones de dólares en ayudas de emergencia para el alquiler, administradas por el Departamento del Tesoro. Consulte las preguntas frecuentes de la NLIHC sobre la ayuda de emergencia para el alquiler para obtener más información: <https://bit.ly/36oHD0L>



El Congreso y la Casa Blanca deben actuar

Para evitar que entre 30 y 40 millones de inquilinos pierdan sus casas este invierno, el Congreso y la Casa Blanca deben tomar medidas. La NLIHC y los defensores de todo el país están instando al presidente Biden a ampliar, mejorar y hacer cumplir la moratoria federal de desalojos. El Congreso también debe aprobar un nuevo paquete de ayuda ante el COVID-19 con fondos adicionales para ayudar con los alquileres y asistencia para las personas sin hogar (véase el artículo relacionado).

Además de abogar por asistencia adicional ante el COVID-19, la NLIHC presionará para que se amplíen las ayudas a la vivienda en 2021. Esperamos trabajar con la administración entrante y el nuevo Congreso para garantizar que las personas con menos ingresos tengan acceso a viviendas seguras, estables, asequibles y accesibles.

El costo de los desalojos

La NLIHC y el programa Innovation for Justice publicaron en noviembre de 2020 [Costos de los desalojos ante el COVID-19](#), en el que se estima el importante aumento del gasto en servicios sociales que sería necesario si se desalojara a millones de inquilinos. Millones de hogares necesitan ayuda para el alquiler y la ampliación de la moratoria federal de desalojos para seguir teniendo una vivienda durante la pandemia. Los desalojos perjudican la salud física y mental, interrumpen la educación de los niños, ponen en peligro la continuidad del empleo y aumentan otras formas de dificultades materiales. Durante una pandemia en curso, los desalojos también ponen a los inquilinos en un riesgo significativo de exposición a enfermedades mortales.

El informe concluye que, además de estas razones principales para evitar un precipicio de desalojos, los desalojos también supondrían una carga para los gobiernos locales y los organismos públicos con costos insostenibles. Los inquilinos desalojados tienen más probabilidades de necesitar camas en albergues de emergencia. Algunos de esos inquilinos se quedan sin hogar como consecuencia del desalojo, lo que puede provocar mayores necesidades de atención médica de urgencia u hospitalización. Los niños de familias desalojadas corren un mayor riesgo de ser colocados en centros de acogida, y los jóvenes que se quedan sin hogar corren un mayor riesgo de ser arrestados y detenidos por delincuencia juvenil. El informe calcula el costo de estos servicios sociales (albergues de emergencia, atención médica de urgencia y hospitalaria, cuidados de acogida y detención de menores) para los inquilinos en riesgo de desalojo.

Las estimaciones sobre la cantidad de familias que alquilan que corren el riesgo de ser desalojadas varían, por lo que el informe también ofrece una gama de estimaciones de costos. Las estimaciones de los inquilinos en riesgo se basan en lo que los inquilinos declaran a la Oficina del Censo sobre su confianza en pagar el alquiler del mes siguiente a tiempo. Si se desalojan

6.6 millones de familias que alquilan, estos costos públicos pueden ascender a \$62,000 millones de dólares. Si se desalojan hasta 14 millones de familias que alquilan, los costos de estos servicios podrían ascender a \$129,000 millones de dólares. Estas estimaciones se basan en los estudios existentes sobre los índices de necesidad de estos servicios por parte de las personas sin hogar y sus costos típicos.

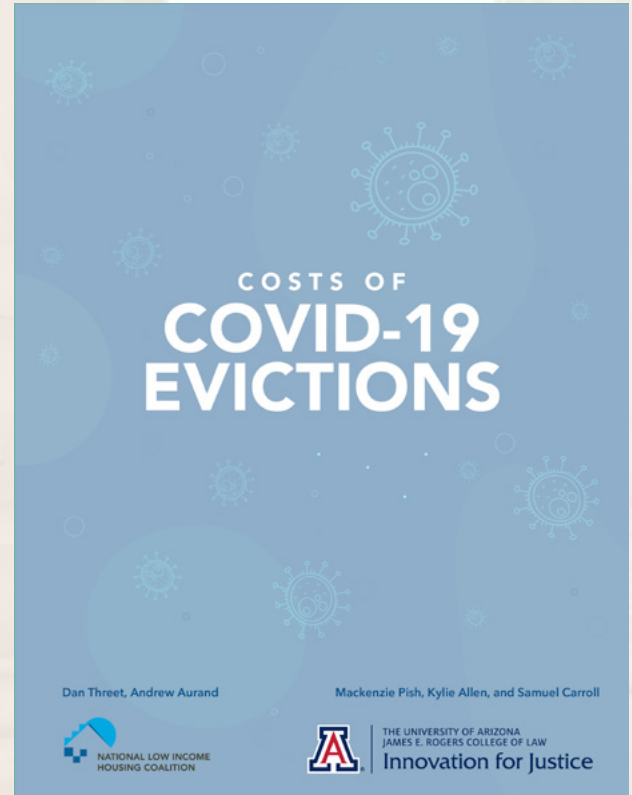


TABLA 2: COSTOS PÚBLICOS SELECTOS DE LAS PERSONAS SIN HOGAR POR DESALOJOS, POR CATEGORÍA DE COSTOS

Suposición de pago de alquileres futuros	Costos públicos selectos i4J de las personas sin hogar relacionadas con los desalojos	Albergue de emergencia	Atención médica de emergencia	Atención médica hospitalaria	Cuidados de acogida	Delincuencia juvenil
Modelo proporcional de la Reserva Federal	\$61,571,832,069	\$26,969,992,004	\$8,440,025,836	\$14,026,455,313	\$7,946,558,884	\$4,188,799,611
Stout (baja)	\$88,171,983,895	\$38,621,519,300	\$12,086,270,976	\$20,086,139,237	\$11,379,616,919	\$5,998,437,464
Stout (alta)	\$128,530,184,245	\$56,299,413,625	\$17,618,415,360	\$29,279,994,198	\$16,588,310,647	\$8,744,050,415

Basándose en el costo medio de una cama en un albergue, el aumento de las personas sin hogar podría requerir \$56,000 millones de dólares para albergues de emergencia. Los hospitales públicos tendrían que afrontar casi \$18,000 millones de dólares en costos por las visitas adicionales a la sala de emergencias. Las personas sin hogar tienen más probabilidades de necesitar atención médica en internación, y los costos de hospitalización podrían ser de \$29,000 millones de dólares.

Es importante destacar que estos costos no tienen en cuenta todos los servicios adicionales que serían necesarios. No incluyen el costo de la adaptación

de los albergues para personas sin hogar ante el COVID-19 o las necesidades de atención médica a largo plazo como consecuencia de no tener hogar, por ejemplo. Una oleada de desalojos no solo sería injusta y perjudicial para los inquilinos desalojados, sino que también crearía un daño económico mayor. Dado que estos costos pueden evitarse si los inquilinos no son expulsados de sus casas, el informe pide al Congreso que financie adecuadamente los programas de ayuda de emergencia para el alquiler.

Avanzan en el Congreso varios proyectos de reforma para la recuperación de desastres

En la segunda mitad de 2020, todas las zonas del país se vieron afectadas por un desastre. La temporada de huracanes en el Atlántico de 2020 registró un número récord de tormentas, y varias de ellas golpearon la costa de Luisiana. Los destructivos incendios forestales ardieron a lo largo de toda la costa oeste, destruyendo comunidades enteras y produciendo nubes de humo que perjudicaron a los trabajadores agrícolas y personal que trabaja al aire libre desde California hasta el río Misisipi. Y la pandemia de COVID-19 ha hecho estragos prácticamente sin control en todo el país. En medio de estos desastres, los defensores de la recuperación y sus socios en el Congreso siguieron presionando para que se reformara el sistema de recuperación de desastres del país, de modo que todos los sobrevivientes pudieran acceder a la ayuda que necesitan para recuperarse. Guiados por las reformas descritas en el informe de la NLIHC [Reforma del sistema de recuperación de desastres de Estados Unidos](#) publicado el pasado verano, los miembros y socios de la Coalición para la Recuperación de la Vivienda en Casos de Desastre (Disaster Housing Recovery Coalition, DHRC), dirigida por la NLIHC, trabajaron para hacer avanzar con éxito varios proyectos de ley en la Cámara de Representantes, siguiendo líneas bipartidistas.

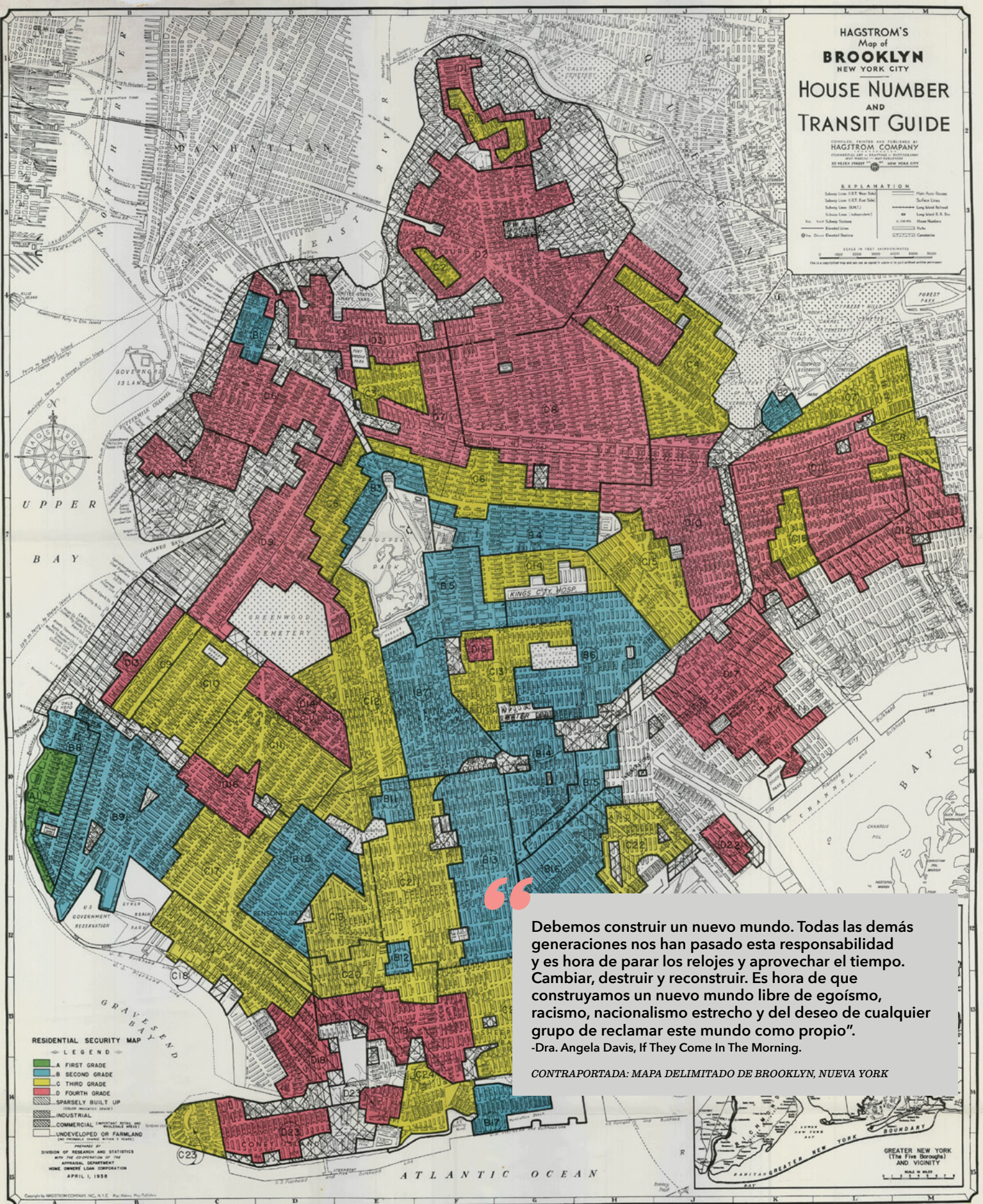
La “[Ley de Vivienda para Víctimas de Grandes Desastres](#)” (H.R. 2914), presentada por el representante Adriano Espaillat (D-NY) y la senadora Elizabeth Warren (D-MA), y apoyada por el presidente del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, Peter DeFazio (D-OR), fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Representantes en noviembre de 2020. El proyecto de ley se redactó con la aportación de los miembros de la DHRC e incluye muchas de las principales prioridades de la Coalición. La legislación aborda los importantes problemas de documentación de los títulos que han dado lugar a que miles de sobrevivientes de desastres que cumplían los requisitos se vieran privados injustamente de la asistencia de la FEMA. El proyecto de ley proporcionaría un nuevo marco para facilitar a los sobrevivientes de desastres comprobar su residencia completando una “declaración” o presentando una variedad más amplia de documentos aceptables, en lugar de un título formal de propiedad o contratos de arrendamiento. La declaración es como la que crearon los miembros del Grupo de Trabajo de la DHRC de Puerto Rico tras el huracán María, en el que se denegó la asistencia a más de 77,000 sobrevivientes por falta de documentación de los títulos. Las reformas del proyecto de ley son cruciales para ayudar a los inquilinos de bajos ingresos, a las personas sin hogar, a los residentes de viviendas prefabricadas, a las personas que viven en tierras tribales y a otros sobrevivientes a obtener la ayuda para la que son elegibles.

La “[Ley de Ayuda de la FEMA de 2020](#)” (H.R. 8266), patrocinada por el presidente del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, Peter DeFazio (D-OR), también fue aprobada por unanimidad por la Cámara en noviembre de 2020. El proyecto de ley ordena a la FEMA a aumentar la financiación para los gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales,

así como para algunas organizaciones sin fines de lucro, a través de su programa de Asistencia Pública (PA), reduciendo significativamente los requisitos de participación en los costos de los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro. El proyecto de ley reembolsaría el 100 % de los gastos relacionados con el COVID y el 90 % de los gastos relacionados con los desastres de 2020. La PA de la FEMA ha sido una valiosa fuente de asistencia para las ciudades y los gobiernos locales que intentan responder a la pandemia de COVID-19 y albergar a las personas que se encuentran sin hogar, a las personas que viven con discapacidades y a otros residentes de centros colectivos en albergues no colectivos durante la pandemia. Aumentar el monto del reembolso de estos gastos fomentará la continuidad y expansión de estos programas que salvan vidas. Nota: El gobierno de Biden emitió una orden ejecutiva para que la FEMA compartiera el 100 % de los costos de los albergues no colectivos, ¡con carácter retroactivo al inicio de la pandemia!

Se presentó por primera vez otra importante ley. El senador Brian Schatz (D-HI) y el senador Chris Van Hollen (D-MD) presentaron la ley “[Ley de Vivienda en Crisis de 2020](#)” (S.5004) a finales de 2020. El proyecto de ley establecería el Programa de Asistencia a la Vivienda en Crisis (Crisis Housing Assistance Program, CHAP), un nuevo programa de vales que se activaría automáticamente al declararse un desastre natural o al aumentar bruscamente los niveles de desempleo en el estado. El CHAP proporcionaría asistencia para la vivienda a través de las agencias locales de vivienda pública para los hogares de bajos ingresos. Los programas de vivienda de la FEMA han sido [criticados por los defensores](#) desde hace tiempo por no satisfacer las necesidades de vivienda a largo plazo de los sobrevivientes de desastres con bajos ingresos. Con el CHAP, los sobrevivientes podrían acceder rápidamente a una vivienda a largo plazo de su propia elección después de un desastre.

Con la nueva administración y el nuevo Congreso, los miembros y socios de la DHRC y sus aliados en el Capitolio seguirán presionando para que se aprueben plenamente estos proyectos de ley y se garantice que todos los sobrevivientes de desastres, incluidos los de bajos ingresos, reciban la ayuda que necesitan para recuperarse plenamente.



Debemos construir un nuevo mundo. Todas las demás generaciones nos han pasado esta responsabilidad y es hora de parar los relojes y aprovechar el tiempo. Cambiar, destruir y reconstruir. Es hora de que construyamos un nuevo mundo libre de egoísmo, racismo, nacionalismo estrecho y del deseo de cualquier grupo de reclamar este mundo como propio".
-Dra. Angela Davis, If They Come In The Morning.

CONTRAPORTADA: MAPA DELIMITADO DE BROOKLYN, NUEVA YORK